REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL
AGUSTÍN CODAZZI – CESAR
J01prmpalcodazzi@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 18 No. 13-07 Barrio Machiques. Tel: 035-5766077

Agustín Codazzi – Cesar, Octubre Doce (12) de Dos Mil Veintiuno (2.021). -

REF: Acción de Tutela promovida por el señor WILLIAM DARÍO VARGAS GIRALDO en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR e INSPECCIÓN DE POLICÍA DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR VINCULADOS: EDWIN MARTINEZ LOAIZA Y EMILCE NIÑO HURTADO.

Radicación No.: 200134089001-2021-00319-00

ASUNTO A TRATAR

Aborda el Despacho la labor de proferir la decisión de fondo que en derecho corresponda dentro de la presente Acción de Tutela promovida por el señor WILLIAM DARÍO VARGAS GIRALDO, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI CESAR Y INSPECCIÓN DE POLICIA DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR VINCULADOS: EDWIN MARTINEZ LOAIZA Y EMILCE NIÑO HURTADO, en defensa de sus Derechos Fundamentales al Debido Proceso y Vivienda Digna, consagrados en los artículos 29 y 51, de la Constitución Política, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes.....

ANTECEDENTES

Mediante solicitud recibida por reparto el día 29 de Septiembre del año en curso, el señor WILLIAM DARÍO VARGAS GIRALDO, deprecia a esta agencia judicial la protección de sus derechos fundamentales al Debido Proceso y Vivienda Digna, consagrados en los artículos 29 y 51, de la Constitución Política, pretendiendo para ello se ordene a la entidad accionada, lo siguiente: **1).** _ Que se revoque, en todas sus partes la audiencia pública de fecha 11 de septiembre de 2.020 adelantada por la inspección de policía del Municipio Agustín Codazzi a través del proceso verbal abreviado consagrado en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016 y en la que se declara infractores a los señores Edwin Martínez Loaiza y Luis Miguel Arévalo y se ordena la restitución del bien Inmueble conocido con el nombre de la "Casa Campesina" **2).** _ Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi -Cesar, de que en caso de pretender adelantar nuevamente un proceso policivo de desalojo en su contra o en el que se vea afectado, debe incorporarlo formalmente, en los programas de vivienda que se encuentre implementando la Administración Municipal. **3).** _ Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi-Cesar, de que en caso de pretender adelantar nuevamente un proceso policivo de desalojo en su contra o en el que se vea afectado, deben brindarle una solución alternativa de vivienda de manera temporal a su favor, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en el numeral segundo de las pretensiones, solución que deberá ser prorrogada en el tiempo hasta que se asegure una solución definitiva de vivienda. **4).** _ Que se advierta, a la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi que en caso de no garantizar las alternativas de vivienda temporales y definitivas descritas en los numerales anteriores, el tutelante pueda continuar ocupando el inmueble en el que habitaba y que suscitó la presente controversia.

Finca el accionante su solicitud en los hechos relacionados en la misma, los cuales podemos enunciar de la siguiente manera:

- Que es hombre de 54 años de edad, que no cuenta con más familia, que posee una discapacidad física que le impide trabajar y valerse por sí solo, que desde hace 5 años perdió de forma casi total su visión, solo tiene un 5% de capacidad visual por un solo ojo y por la progresividad de su diagnóstico clínico es altamente factible que a corto plazo pierda su visión en un 100%, que actualmente subsiste gracias a la caridad de la señora Emilce Niño Hurtado, quien le dio posada después de que fue desalojado de las antiguas bodegas de CENALGODÓN por parte de la Alcaldía Municipal.

- Que la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi-Cesar, a través de la inspección de policía, actualmente adelanta un proceso policivo tendiente a la recuperación de un inmueble urbano, presuntamente de propiedad del Municipio de Agustín Codazzi, dicho proceso policivo se adelanta en contra del señor Edwin Martínez Loaiza y contra personas indeterminadas, vive en el predio desde hace más o menos dos años y medio, de forma pública; pacífica e ininterrumpida, jamás ha ejercido actos violentos ni arbitrarios para permanecer en el inmueble, que subsiste gracias a la caridad de la señora Emilce Niño, quien le dio posada después de que fue desalojado de las antiguas bodegas de CENALGODON por parte de la alcaldía Municipal.
- Que es totalmente falsa la motivación dada al proceso policivo que pretende el desalojo del inmueble, pues en ella se dice que no existe en los archivos municipales, ningún tipo de antecedente o documentación que justifique la ocupación irregular del inmueble, cuando en realidad si existen suficientes elementos de juicio para demostrar que la ocupación del inmueble por parte de su poseedor inicial el señor EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA, se dio en virtud de una orden de trabajo suscrita por funcionario competente de la Alcaldía Municipal, en la que se le ordena trasladarse a dicha vivienda para cuidarla y evitar que fuera arruinada y destruida por los saqueadores de la zona; tal como pasó con las antiguas bodegas de CORAL contiguas a la vivienda.
- Que es totalmente falso, la motivación dada al proceso policivo de desalojo en la que se afirma que la vivienda objeto de ocupación está siendo explotada económicamente; pues la señora Emilce Niño Hurtado, no cuenta con un empleo formal y subsiste mediante la economía del rebusque vendiendo platos de sopa en un pequeño espacio dentro del lote donde está ubicado el inmueble, que queda entre un arroyo y la acera de la calle contigua a la vivienda, es decir; el inmueble no es un lugar abierto al público, no tiene ningún tipo de infraestructura comercial dentro de la vivienda, no tiene empleados, no tiene actividades comerciales registradas en la cámara de comercio, solo cuenta con una olla, un anafre y un par de sillas y mesas con las que ella se rebusca el sustento diario de su familia, vendiendo porciones de sopa.
- Que dada la frágil situación económica, no ha podido ejercer su defensa técnica en el proceso policivo que se adelanta, pues ello conllevaría el pago de honorarios de un profesional en derecho y como dijo anteriormente, debido a su discapacidad visual, subsiste gracias a la caridad de la señora Emilce Niño Hurtado, cuyos ingresos a duras penas alcanzan para alimentarse y proveerse de lo más básico para tratar de llevar una vida precariamente digna y logró presentar la acción de tutela, gracias a la caridad y altruismo de un abogado conocido.
- Que, si se materializa la diligencia de desalojo forzoso, pondrían a las personas que habitan la vivienda en situación de calle o estado de indigencia; ya que no cuentan con suficientes recursos económicos para pagar el arriendo de una vivienda, y la Alcaldía Municipal, a lo largo del proceso policivo en curso, no les ha planteado una solución alternativa a su problema habitacional tal como en abundante y reiterada jurisprudencia de la corte constitucional se ha ordenado en múltiples casos.

Aporta la accionante como pruebas de sus aseertos, las siguientes: **a).** _ Copia de orden de servicios impartida al señor Edwin Martínez Loaiza, suscrita por funcionario competente de la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi-Cesar. **b).** _ Copia el proceso verbal abreviado adelantado por la inspección de policía. **c).** _ Historia Clínica del señor afectado.

Por venir en legal forma la solicitud fue admitida mediante auto adiado 29 de Septiembre del cursante año, requiriéndose a las entidades accionadas ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR y LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, y a los vinculados: EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA y EMILCE NIÑO HURTADO, para que en el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio, se sirvieran rendir un informe sobre los hechos planteados por el peticionario, habiéndose pronunciado la segunda, es decir LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, a través de su titular doctor JAIRO CRUZCO DAZA, quien se limitó a aportar copia de las diligencias adelantadas en su despacho y de la contestación de una tutela similar

tramitada n el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esta ciudad, , mientras que los demás, guardaron absoluto silencio. .

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido relacionado el acervo probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que en estricto derecho corresponda, previas las siguientes...

CONSIDERACIONES

1._Competencia

Para esta casa judicial es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto – Ley 2591 de 1991 y artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer de la presente acción tutela recae en este despacho.

2._Legitimación de las partes

El señor WILLIAM DARÍO VARGAS GIRALDO, por ser la persona afectada con los presuntos actos y omisiones de la entidad accionada, se encuentra legitimado para incoar la presente acción de tutela. Así mismo la ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR y LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, por ser las entidades a las cuales el accionante les atribuye los actos y omisiones con los que presuntamente se vulneran sus derechos fundamentales, reúnen los presupuestos de legitimidad para comparecer en calidad de demandadas, dentro de este trámite tutelar. De igual manera, los señores EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA y EMILCE NIÑO HURTADO, por haber sido vinculados a esta actuación, se encuentran legitimados para comparecer a la misma, en calidad de terceros con interés legítimo.

3._ Problemas jurídicos y esquema de resolución

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a este despacho determinar los siguientes aspectos: **i).** _ La procedencia de la acción. **ii).** _ De ser procedente la acción, establecer si las entidades accionada la ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR y la INSPECCIÓN DE POLICÍA DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR, dentro de la actuación adelantada con ocasión de la Querella Policiva por Perturbación a la Posesión o Mera Tenencia, vulnera los derechos fundamentales al Debido Proceso y a la Vivienda Digna, cuyo amparo invoca, y de ser así, adoptar las medidas necesarias para su protección.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, esta casa judicial procederá de la siguiente manera **1).**_ Se determinará inicialmente la procedencia de la acción incoada. **2).**_ Se referirá a los derechos cuya protección se impetra. **3).**_ Se abordará el caso concreto.

3.1._ Procedencia.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela es dable aclarar que ésta al ser elevada a precepto constitucional por el Constituyente de 1991, ha sido concebida como un medio de defensa, ágil, eficaz, preferente, residual y sumario de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos por los particulares cuando éstos se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: a)._ Cuando cumplan funciones públicas o que estén encargadas de la prestación de un servicio público. b)._ Cuando sus acciones u omisiones afecten grave y directamente el interés colectivo; y c)._ Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto al particular.

En razón de lo anterior Nuestra Carta Política en su artículo 86 dispone:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

Se le quiso dar a esta herramienta constitucional un efecto inmediato y subsidiario al limitar su procedencia a la inexistencia de otro medio de defensa judicial de igual eficacia para la protección del derecho, o que habiéndolo, esta se utilice como mecanismo de carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiere lo anterior significar que la acción de tutela es un mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales que procede *i)* cuando el afectado no dispone de otro instrumento para su restablecimiento, *ii)* en caso de que el previsto no resulte eficaz, en consideración a la situación particular que afronta el actor y *iii)* siempre que la intervención transitoria del juez de amparo resulte necesaria, para evitar o al menos mitigar un perjuicio irremediable.

En el caso sub examine y de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, todas las personas están legitimadas para interponer la acción de tutela para la defensa de sus derechos fundamentales, siempre y cuando se encuentren en las situaciones de excepcionalidad a la que aluden la ley, esto es, que no exista otro mecanismo judicial idóneo para la defensa de dichos derechos, o que habiéndolo se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Más recientemente, en Sentencia T-358/15, la Corte Constitucional precisó:

*(...) De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la tutela opera como un mecanismo de protección subsidiario, cuando el instrumento principal no es idóneo o eficaz para la protección de un derecho fundamental, **o cuando es empleada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.*** (Subrayas y negrillas ajenas al texto original).

"(...) La jurisprudencia constitucional ha señalado que si el afectado tuviera a su disposición otros mecanismos judiciales que resultaren eficaces para la protección que reclama, es su deber acudir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Así las cosas, la subsidiaridad implica que el accionante agote previamente los medios de defensa legalmente disponibles para proteger los derechos, pues la tutela no puede desplazar los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, ni tampoco servir de herramienta procesal extraordinaria y adicional de los diferentes procesos judiciales, cuando al interior de éstos, las oportunidades para interponer los recursos ya prescribieron".

En lo que atañe a la procedencia de la acción de tutela para reclamar el derecho a la vivienda digna de las personas desplazadas, la Corte ha conceptuado:

"(...) De la jurisprudencia de la Corporación construida en escenarios constitucionales semejantes al que se aborda en esta oportunidad, es posible extraer las siguientes conclusiones: existe jurisprudencia constante, uniforme y reiterada por distintas salas de revisión en el sentido de que (i) la tutela es procedente en términos formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada se encuentra inmersa en diligencias de desalojo (o, de forma más amplia, en procesos policivos de restitución bienes ocupados irregularmente), incluso cuando los bienes ocupados son de propiedad pública. En esos casos, (ii) el Estado tiene la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva y (iii), en caso de que ello no haya ocurrido aún, tiene el deber de activar el sistema de protección de la población desplazada y asumir las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la ley y el reglamento en cabeza de las distintas autoridades públicas frente a las víctimas del conflicto armado (...)". (Sentencia T-282/11)

En Sentencia T-848/11, la Corte precisó:

"(...) Para analizar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección del derecho de vivienda, debe verificarse, especialmente: "(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que afecten el derecho a la

vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede⁴²¹.

"En síntesis, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que por la vía de la tutela es posible amparar el derecho a la vivienda únicamente cuando su vulneración se encuentra en conexidad con la afectación de otros derechos fundamentales⁴²¹, tal es el caso del derecho a la vida(...)".

En el caso bajo estudio el Despacho no advierte que el accionante disponga de otro mecanismo legal idóneo para solicitar la protección de sus derechos fundamentales que considera conculcados, de allí que se pueda pregonarse de la acción incoada su procedencia.

3.2._ Derechos fundamental cuya protección se invoca

3.2.1._ Derecho a la Vivienda Digna

"(...) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho a la vivienda digna como aquel dirigido a suplir la necesidad humana de "disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida". Este derecho se encuentra consagrado constitucionalmente en el artículo 51 de la Carta Política, dentro del capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, prerrogativas con las cuales se busca garantizar la consecución de los fines del Estado social de derecho, especialmente la de promover la prosperidad general (...)". (Sent. T-761/11).

Así mismo, en sentencia T-919/11, el Alto Tribunal manifestó:

"(...) El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida. Igualmente, el artículo 51 de la Constitución Política consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y asigna al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos programas. El derecho a la vivienda digna está íntimamente relacionado con el derecho a la vida en condiciones dignas y que de conformidad con la Observación General No 4 antes citada, debe procurarse que la materialización del derecho no adolezca de a) la seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.

"(...) Igualmente, esta Corporación, con fundamento en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fijó los requisitos para que una vivienda digna sea considerada como tal. Al respecto, la Sentencia T-585 de 27 de julio de 2006, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, expresó que:

*"(...) En primer lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) **Habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud.** (ii) Facilidad de acceso a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, **y en zonas que no pongan en riesgo la salud de***

los habitantes. (iv) Adecuación cultural a sus habitantes. En segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. (...). (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal". (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En lo que concierne a los desalojos forzados, la Corte, en Sentencia T-946/11, indicó:

"(...) El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Número 7 (en adelante OG 7), se ocupó del tema de los desalojos forzados y la incidencia que tienen sobre el derecho a una vivienda digna, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El Comité definió la expresión "desalojo forzoso" en el párrafo 3º de la OG 7 como **"el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzados no se aplica a los desalojos forzados efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos"** (Subrayas y negrillas ajenas al texto original).

Como se observa, si bien en principio los desalojos forzados resultan contrarios al derecho a una vivienda digna, aquellos que se realicen de manera legal y respeten los contenidos de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos se consideran compatibles con las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados. En efecto, todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías del derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas: "a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales (...)"

No obstante lo anterior, esa Corporación, en Sentencia T-725 de 2008, decantó las circunstancias en que las órdenes de desalojo impartidas contra los ocupantes de un predio, no constituyen vulneración de derechos fundamentales. Así dijo la Corte:

"(...) La jurisprudencia constitucional ha definido, de manera clara y reiterada, la regla según la cual las órdenes de desalojo dadas a los ocupantes de un predio no constituyen, en principio, una vulneración a los derechos fundamentales de éstos cuando: (i) no han acreditado tener algún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio en

cuestión y (ii) la orden de desalojo tiene como motivo garantizar la protección de los ocupantes en razón a que el predio habitado ha sido declarado zona de alto riesgo (...)”.

3.2.2._ Debido Proceso._ En lo que atañe al Debido Proceso, es importante resaltar que por constituir una prerrogativa que tiene arraigo en Nuestra Carta Fundamental, y no solamente en su artículo 29, que consagra de manera clara y precisa la imperatividad de darle aplicación en todas las actuaciones judiciales y administrativas, sino que además, se encuentra implícita en una gran parte de la normatividad que regenta otras garantías de orden constitucional y legal tales como el derecho a la defensa, contradicción, juez natural, presunción de inocencia, libre acceso a la justicia, la cosa juzgada, entre otros, es de aquellas garantías que admiten su protección a través de este medio expedito, residual, sumario y eficaz.

La doctrina constitucional define el debido proceso como: *“Todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguren a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, al igual que la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales y de las decisiones que le puedan afectar, proferidas conforme a derecho*

3.4._ El caso concreto.

En el evento sometido a decisión, del acervo probatorio acopiado se puede observar sin dubitación alguna, que la presente acción constitucional instaurada por el señor WILLIAN DARÍO VARGAS GIRALDO, persigue que este despacho: **1).** _ Proceda a revocar en todas sus partes lo resuelto por el Inspector de Policía d este municipio, en la audiencia celebrada el día 11 de Septiembre de 2020, dentro del trámite del Proceso Policivo Verbal Abreviado por Perturbación a la Posesión o Mera Tenencia, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 77, 22 y subsiguientes de la Ley 1801 de 2016, actual Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde ordenó Declarar infractores a los señores EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA y LUIS MIGUEL ARÉVALO y PERSONAS INDETERMINADAS y ordena la restitución del inmueble ocupado y el desalojo de los ocupantes, aduciendo que subsiste gracias a la caridad de la señora EMLCE NIÑO, también ocupante del predio conocido como 2Casa Campesina”, quien le dio posada después de que fue desalojado de las antiguas bodegas de CENALGODON por parte de la alcaldía Municipal. **2).** _ Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi -Cesar, que en caso de pretender adelantar nuevamente un proceso policivo de desalojo en su contra o en el que se vea afectado, debe incorporarlo formalmente, en los programas de vivienda que se encuentre implementando la Administración Municipal. **3).** _ Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi-Cesar, que en caso de pretender adelantar nuevamente un proceso policivo de desalojo en su contra o en el que se vea afectado, deben brindarle una solución alternativa de vivienda de manera temporal a su favor, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en el numeral segundo de las pretensiones, solución que deberá ser prorrogada en el tiempo hasta que se asegure una solución definitiva de vivienda. **4).** _ Que se advierta, a la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi que en caso de no garantizar las alternativas de vivienda temporales y definitivas descritas en los numerales anteriores, el tutelante pueda continuar ocupando el inmueble en el que habitaba y que suscitó la presente controversia.

Ahora bien, se entiende de lo alegado por el actor y del compendio probatorio acopiado, que se trata de una persona de 54 años con problemas de visión que le impide trabajar y valerse por si solo, quien fue acogido por la señora Emilce Niño quien reside en un inmueble perteneciente al Municipio de Agustín Codazzi, denominado Casa Campesina, habiéndose adelantado ante la Inspección de Policía de esta ciudad, Proceso Policivo Verbal Abreviado por Perturbación a la Posesión o Mera Tenencia, donde se adoptó como decisión de fondo de fecha 11 de Septiembre de 2020, Declarar infractores a los señores EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA y LUIS MIGUEL ARÉVALO y PERSONAS INDETERMINADAS y ordena la restitución del inmueble ocupado y el desalojo de los ocupantes, decisión que considera el demandante lo afecta por cuanto una de las ocupantes, la señora EMILCE NIÑO, le ha dado posada en dicho inmueble, en consecuencia al ser restituido el bien a su propietario que en este caso es el Municipio de Agustín Codazzi, también él sería desalojado, vulnerándose con ello – en su sentir -, sus derechos fundamentales al Debido Proceso y a una Vivienda Digna.

Siendo las cosas de este tenor y conforme a lo indicado por el ente municipal en la respectiva querrela, se puede colegir que el inmueble ocupado y que el Ente Territorial pretende le sea restituido, es de aquellos que tienen la calidad de Bienes de Uso Público, ejerciendo este su dominio pero destinado al uso general o de toda la comunidad, haciéndose necesario la ejecución de la orden de desalojo emitida por la Inspección de Policía Municipal, a fin de garantizar el orden y la estabilidad jurídica, como quiera que existen derechos de legítimamente adquiridos por la entidad querellante.

En este orden de ideas es importante precisar que la Corte Constitucional ha sostenido que "(...) las órdenes de desalojo impartidas a los ocupantes de un predio, no constituyen, en principio, una vulneración per se de sus derechos fundamentales, cuando: (i) tiene como motivo garantizar la protección de los ocupantes en razón a que el predio habitado ha sido declarado zona de alto riesgo, y, (ii) no han acreditado tener ningún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio en cuestión". (Subrayas ajenas al texto original).

Siendo las cosas de esta manera, encuentra esta casa judicial que el procedimiento adelantado por la Inspección de Policía de esta localidad es legal y legítimo, toda vez que el ocupante ahora accionante, en esta acción de amparo, no han acreditado, ni siquiera ha alegado, tener algún derecho de propiedad, posesión o tenencia legítima sobre el predio en cuestión. La orden de desalojo tiene por objeto garantizar a quienes sí han demostrado tener dichos derechos sobre el predio, el ejercicio de los mismos. Deviene entonces de lo anterior, que la actuación que el demandante considera le vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna, no es ni injusta, ni ilícita, ni ilegítima; por lo contrario, se trata de un proceso consagrado en la ley que en el caso concreto cumple la finalidad buscada: proteger la propiedad y la posesión de quienes demuestran detentar estos derechos sobre el bien ocupado y además, asegurar el orden público.

En Sentencia T-029/12, la Corte se refirió a esta clase de procedimientos, en los siguientes términos:

"(...) Las autoridades municipales, alcaldes e inspectores de policía, dentro de las funciones que tienen asignadas por la Constitución, han de conservar el orden público, lo cual implica garantizar condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permitan la vida en sociedad. Parte de la preservación del orden público lleva a mantener el status quo, por lo cual, frente a dichas autoridades es posible solicitar la realización de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, cuya finalidad es brindar protección al poseedor o tenedor de un bien que haya sido despojado del inmueble por un acto ilegítimo.

"Dicho procedimiento es uno de los casos especiales en los cuales las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y como tal, los actos que emitan no podrán ser revisados por la jurisdicción contencioso administrativo. No obstante, ello no es óbice para que luego las partes del litigio acudan a la jurisdicción ordinaria para discutir los derechos reales o subjetivos que existan de por medio. Por consiguiente, se pone de presente que la decisión de la autoridad de policía es provisional, pretende la protección del status quo y se ha de regir por el principio de celeridad (...)".

Así lo afirmó esa Corporación en la sentencia T-878 de 1999, que expresa lo siguiente:

"Según la normatividad aplicable, a los procesos policivos, que se encuentra contenida en el decreto 1355 de 1970, rigen los principios de economía procesal, celeridad e inmediatez, basados en la urgencia y necesidad de adoptar medidas oportunas y eficaces para proteger los derechos o intereses cuya protección se impetra.

Ahora bien, uno de los procesos de policía más efectivos es el del lanzamiento por ocupación de hecho, cuyo objetivo es evitar que se perturbe, o que se ponga fin a la perturbación, entre otras situaciones, de la posesión que alguien tenga sobre un bien, de modo que se restablezca y preserve la situación que existía al momento en que ocurrieron los hechos que la motivaron.

La actuación dentro del referido proceso debe ser lo más diligente posible para que la protección del derecho o del interés transgredido se satisfaga a la mayor brevedad; es por ello que se tramita en única instancia, con el fin de no retardar la expedición y efectividad de las medidas que tiendan a remediar la situación."

Acción de tutela promovida por el señor WILLIAN DARÍO VRGAS GIRALDO en contra de LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, y LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR... Vinculados: EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA y EMILCE NIÑO HURTADO. . RAD. 2001340890012013-00319i-00.

"(...) Según la ley dicho proceso presupone una perturbación de la posesión, como lo sería la ocupación de una finca, a partir de lo cual se legitima al poseedor o tenedor despojado a acudir a las autoridades policivas con el fin de "corregir la perturbación y restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de que ella se presentare. Es decir, restituir el statu quo."^[12]

"(...) Una vez iniciado el proceso policivo con las formalidades exigidas por la ley procesal^[12], el funcionario dictará orden de lanzamiento contra los ocupantes, que deberá quedar notificada personalmente, y a partir de la cual se realizará la diligencia respectiva para restablecer la posesión. Así las cosas, es preciso señalar que dentro de dicha diligencia se le ha de dar la oportunidad al ocupante de la finca de justificar su ocupación. Si demuestra justa causa^[12] deberá suspenderse la diligencia, hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva el conflicto de fondo (...)"

Por otro lado, no existe dentro de este trámite constitucional elemento cognoscitivo alguno que nos lleve a concluir que el accionante acudió ante las entidades accionadas en procura de ser incluida en los planes, programas o proyectos de vivienda que estos estuvieren adelantando, y que hubiese sido rechazado injustificadamente, por lo tanto mal podríamos considerar que estos le hayan negado al accionante la oportunidad de acceder a los mismos, y menos aún que le hayan cercenado o vulnerado entonces su derecho a tener una vivienda digna.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, no advierte este despacho vulneración de los derechos fundamentales con la orden de desalojo impartida por la Inspección de Policía de esta ciudad, ni tampoco que al actor se le haya excluido de los programas, proyectos o planes de vivienda que los entes accionados se encuentren adelantando, por lo tanto la solicitud de tutela será denegada, no obstante, como quiera que el accionante padece una discapacidad de la visión que no le permiten trabajar, se insta al representante del ente territorial accionado, es decir, al señor Alcalde Municipal, para que, en el evento en que, de reunir los requisitos exigidos, se considere la inclusión de este en los programas sociales que el Municipio adelante para personas con esta clase de discapacidades..

En mérito de lo antes expuesto el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi – Cesar, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. _ Denegar, por improcedente, el amparo constitucional invocado por el señor **WILLIAM DARIO VARGAS GIRALDO**, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo. _ Instese al representante legal del MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI - CESAR, para que, en el evento en que, de reunir los requisitos exigidos, se considere la inclusión de este en los programas sociales que el Municipio adelante para personas con esta clase de discapacidades..

Tercero. _ Notifíquese este fallo a las partes intervinientes, por el medio más expedito (art. 16 del decreto 2591 de 1991).

Cuarto. _ Contra esta decisión procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión Por el medio más eficaz notifíquese a los interesados.-

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALGEMIRO DIAZ MAYA

Juez

**REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
AGUSTIN CODAZZI- CESAR**

Agustín Codazzi, Cesar, Doce (12) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Oficio No. TC-1053

Señor:
WILLIAM DARIO VARGAS GIRALDO
EMAIL: johanasam@gmail.com
Celular:3042188127
Dirección: Carrera 16 4-97 Barrio El Carmen Agustín Codazzi
Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR
Señores:
INSPECCIÓN DE POLICIA DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR
Señor:
EDWIN MARTINEZ LOAIZA
Celular:3164384136
Correo: edwinloaiza09@gmail.com
Señora:
EMILCE NIÑO HURTADO
Correo: johanasam@gmail.com

REF: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: WILLIAM DARIO VARGAS GIRALDO ACCIONADOS: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR – INSPECCIÓN DE POLICIA DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR VINCULADOS: EDWIN MARTINEZ LOAIZA Y EMILCE NIÑO HURTADO RADICADO: 200134089001-2021-00319-00

Para efectos de notificación personal, me permito informarle que este despacho mediante fallo de la fecha del presente año, **resolvió: (...).Primero. _ Denegar,** por improcedente, el amparo constitucional invocado por el señor **WILLIAM DARIO VARGAS GIRALDO** por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. **Segundo. _ Instese** al representante legal del MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI-CESAR para que, en el evento en que, de reunir los requisitos exigidos, se considere la inclusión de este en los programas sociales que el Municipio adelante para personas con esta clase de discapacidades.**Tercero. _** Notifíquese este fallo a las partes intervinientes, por el medio más expedito (art. 16 del decreto 2591 de 1991).**Cuarto.-** Contra esta decisión procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado esté fallo dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión Por el medio más eficaz notifíquese a los interesados.-

Cordialmente,

FELIPE DE JESUS CABANA TOLOZA
Oficial Mayor

FIRMADO SOBRE EL ORIGINAL

CALLE 18 # 13-07 BARRIO MACHIQUEZ-AGUSTIN CODAZZI-CESAR TEL (FAX) 5766-077
E-MAIL j01prmpalcodazzi@cendoj.ramajudicial.gov.co